

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.
En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 258		FECHA: 6 de Marzo de 2017
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	Nº PÁG.
BOLIVIA	21F: UN BALANCE	2
COLOMBIA	EL 28% DE LOS DEFENSORES DE DD. HH. ASESINADOS DURANTE 2016 ERAN COLOMBIANOS	3
EL SALVADOR	EL FMLN DENUNCIA LA INJERENCIA DE LA EMBAJADORA DE EEUU EN ASUNTOS POLÍTICOS INTERNOS	4
GUATEMALA	CINCO EXMILITARES ENFRENTARÁN JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD	4
HAITÍ	ACERCA DEL GOBIERNO DE JOVENEL MOISE	5
	PETITORIO/CARTA RETIRO TROPAS MINUSTAH DEL TERRITORIO HAITIANO	6
HONDURAS	ASESINOS DE CÁCERES PERTENECÍAN A LA INTELIGENCIA DE HONDURAS	8
MÉXICO	AVALA PRD-PUEBLA PROPUESTA DE BARBOSA PARA QUE AMLO SEA EL CANDIDATO DE LAS IZQUIERDAS	9
NICARAGUA	¡NO A LA APROBACIÓN DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN NICARAGUA!	9
PANAMÁ	LAS MANIOBRAS OLIGARCAS DENTRO DE LA OLIGARQUÍA	11
PUERTO RICO	CONVOCAN MANIFESTACION CONTRA EL PLAN FISCAL Y LA REFORMA LABORAL	12
VENEZUELA	LA URGENTE NECESIDAD DE EE.UU DE ACABAR CON PETROCARIBE	13

BOLIVIA

21F: UN BALANCE

Toda constitución es fruto de la correlación de fuerzas de un momento histórico determinado. No solo eso, si no que toda constitución es flexible e interpretable. Si no fuese así, la Constitución de los Estados Unidos no se hubiese mantenido vigente durante 230 años.

Es por eso que el debate sobre el respeto a la Constitución Política del Estado es un debate falso al que nos quieren llevar los que nunca creyeron en la misma, los que despreciaron la Asamblea Constituyente y el núcleo duro del proceso de cambio que impulsó esa Asamblea, el movimiento indígena originario campesino.

Lo que sucedió el 21 de febrero de 2016 fue la consolidación de una forma de hacer política muy propia precisamente de la política estadounidense, la deslegitimación del líder mediante una operación que incluye la construcción de una mentira que es amplificadas por medios masivos con gran impacto en la ciudadanía.

Las aristas oscuras de la trama ya se han esclarecido. Gracias a los mecanismos e instituciones del Estado de Derecho sabemos que no hubo hijo (una jueza dictaminó su inexistencia) y que no hubo tráfico de influencias (una comisión de investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional así lo determinó, y ni siquiera el informe en minoría de la oposición muestra ningún indicio).

Lo que sucedió el 21 de febrero de 2017 es una disputa política y simbólica, un campo de batalla en dos terrenos diferentes, las calles y las redes sociales. Y así como la disputa por el relato se salda a favor del oficialismo durante los meses posteriores al 21F, pero solo una vez que el Caso Zapata cumplió su objetivo de impulsar la victoria del No en el referéndum, esta vez el campo de disputa que son las calles y las redes, se ha saldado con una derrota de la oposición.

Hay que reconocer que la movilización opositora en La Paz fue importante. Pero fue la única imagen en todo el país que se puede contraponer a las movilizaciones convocadas por las organizaciones sociales. Bolivia es mucho más que las "clases medias ilustradas" paceñas. De hecho, Bolivia es mucho más que el eje central que sale en todas las encuestas.

En el campo de lucha que son las redes sociales, esta vez el oficialismo tomó la delantera y logró posicionar una idea, la de la mentira que convierte en ilegítima una victoria en las urnas, frente a una oposición con un mensaje disperso y fragmentado. Bolivia dijo No es un mensaje del pasado que no le sirve a la oposición para proyectarse al futuro. No hay proyecto en ese mensaje, no hay ideas para interpelar a la población boliviana con ese slogan.

Entre los debates pendientes para cerrar el 21F y comenzar la etapa 2017-2019 el más importante es el de la ética periodística. Todavía no se ha hecho desde los medios una autocrítica de porqué se sumaron a una campaña de mentiras y desprestigio contra el Presidente. Salvo que su objetivo fuese político, y no periodístico, y algunos medios privados busquen convertirse en los verdaderos partidos de oposición ante el descrédito de la oposición política de este país.

El otro debate es el de los límites. ¿Cuáles son los límites para hacer oposición? ¿Vale todo para golpear a un gobierno aunque las consecuencias sean desenterrar un clasismo y racismo que también se manifiesta en nuestras calles en las marchas opositoras?

Todo ello nos conduce a mirar la etapa política que se viene. Los sectores que apoyan el gobierno ya han definido que Evo Morales será su candidato, y que se habilitarán las vías que sean necesarias para una nueva postulación del Presidente, vías siempre democráticas y constitucionales. Enfrente, una oposición fragmentada y dispersa, a la que si bien el "No" le permitió unirse detrás de una sola opción en las urnas, parece poco probable que puedan dejar a un lado sus egos e intereses particulares y conformar una única candidatura que enfrente a Evo Morales en 2019.

Finalmente, y más importante aún que esas famosas clases medias urbanas, la juventud como escenario de disputa política. Una juventud, como en cualquier sociedad, inconforme; una juventud que no tiene memoria histórica de la época neoliberal; una juventud que no valora de la misma manera que otros sectores los logros de gestión; una juventud que busca canalizar su deseo de vivir mejor, no siempre en sintonía con vivir bien; una juventud que debe ser objetivo de una nueva etapa de seducción política, y que debe saber que lo mejor está por venir.

(Fuente: Katu Arkonada. Rebelión)

COLOMBIA

EL 28% DE LOS DEFENSORES DE DD. HH. ASESINADOS DURANTE 2016 ERAN COLOMBIANOS

El reciente informe del movimiento Amnistía Internacional sobre la condición de los derechos humanos en el mundo señala que Colombia continúa con una grave crisis humanitaria que afecta a los defensores de DD. HH.

De hecho, aquel presenta un dato contundente que preocupa en el actual escenario de implementación de los acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP: 281 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el mundo durante 2016; y de ellos, 80 eran colombianos, es decir casi el 28%.

En relación con el continente americano, en éste se presentaron 217 asesinatos que representan el 77% de este tipo de asesinatos en el mundo. En este contexto, Colombia lidera la lista de países en el continente con el 36% de total de las muertes de líderes en la región. Esto demuestra que ser defensor de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo.

Según denuncias de varias organizaciones sociales, los homicidios de los 80 defensores de derechos humanos en el país se deberían al interés de grupos paramilitares de tomarse los antiguos territorios donde estaba presente la guerrilla de las FARC-EP.

Cabe resaltar que en algunos de esos territorios hay registros de cultivos ilícitos o existen iniciativas campesinas de conformar zonas de reserva campesina. Adicionalmente está el interés de esos grupos ilegales de seguir impidiendo la restitución de tierras en zonas en las cuales ya tienen presencia, pues el despojo del territorio sigue siendo su estrategia para mantener el poder.

Otro dato para tener en cuenta es que los homicidios de defensores de DD. HH. se perpetraron en zonas donde posiblemente se habilitarán las circunscripciones especiales de paz –que están incluidas en los acuerdos de La Habana–, si se acoge la propuesta presentada inicialmente por Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral.

En relación con Antioquia, diez de los trece asesinatos de líderes defensores de derechos humanos en el departamento ocurrieron en municipios de subregiones donde, según la propuesta del magistrado, se podrían habilitar circunscripciones especiales de paz.

El informe de Amnistía también afirma que Colombia está entre los países americanos donde se presenta mayor impunidad en los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos.

Por este motivo, durante la instalación del Comité de Garantías de Seguridad –acordado entre el Gobierno y las FARC–, que tuvo lugar el pasado 23 de febrero en Popayán, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que ese mecanismo buscará “prevenir y esclarecer las amenazas y las conductas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”, para impedir “que se repitan tragedias como la que ocurrió con la Unión Patriótica en los años 80 y 90”.

El cumplimiento de esta afirmación del presidente Santos dependerá, en gran parte, de que el estado no solo garantice la vida de los líderes sociales, sino que igualmente permita cambiar el contexto actual de la población que habita en las zonas más afectadas por el conflicto, donde el miedo a participar en política es constante.

Lograr lo anterior representa un primer avance para que Colombia no solo deje de encabezar los listados mundiales de países con el mayor número de violaciones a los derechos humanos sino que, también, permita aparecer en escenarios públicos a nuevas caras de la política que vienen a representar a las voces que nunca han sido escuchadas en el Congreso de la República.

** Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).*

Fuente: Carlos Hernán Montoya Suárez en IPC Agencia de Prensa

EL SALVADOR

EL FMLN DENUNCIA LA INJERENCIA DE LA EMBAJADORA DE EEUU EN ASUNTOS POLÍTICOS INTERNOS

El gobernante partido FMLN reiteró este martes la injerencia en asuntos políticos internos y en el panorama electoral por parte de la embajadora de EEUU, Jean Manes, al crear un Consejo Juvenil cuyo presidente es militante del partido Arena.

El Secretario General del FMLN, Medardo González, denunció la intromisión de la embajadora Manes en asuntos internos, al nombrar como director del referido consejo, supuestamente plural, a Erick Ortiz, dirigente juvenil del ultraderechista partido Arena, y que en teoría son jóvenes con capacidad de liderazgo.

“Lamentamos que suceda este tipo de hechos, precisamente el mismo día que la Sala Constitucional daba un zarpazo al Tribunal Supremo Electoral”, dijo González en Radio Maya Visión.

“Creemos que esa instancia (Consejo Juvenil) es un mecanismo injerencista en los asuntos internos de otro país de una embajadora”, precisó el político.

“Nosotros lo rechazamos, lo lamentamos y lo condenamos, ya lo hemos dicho con toda claridad”, agregó el también diputado.

“Cómo es posible crear un Consejo Juvenil, es hacer trabajo político. Es como si la embajada de El Salvador en Guatemala comience a crear un consejo con jóvenes guatemaltecos para incidencia en ese país. Eso no nos compete”, valoró y comparó González.

“Una embajada no puede hacer trabajo político. Consideramos que es una actitud de intromisión, de injerencia, no debemos políticamente aceptar este tipo de injerencia”, señaló González el lunes anterior en una entrevista en canal 12 de televisión, donde advirtió también de que “ahí hay una clara coordinación de esfuerzos y de trabajo entre la embajada de Estados Unidos y el partido ARENA”.

(Fuente. Nodal)

GUATEMALA

CINCO EXMILITARES ENFRENTARÁN JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

En el Juzgado de Mayor Riesgo C se realizó la audiencia de etapa intermedia en donde el juez dictaminó que cinco militares retirados tendrán que enfrentar juicio por el caso de la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, hecho ocurrido en 1981.

Los señalados son: el comandante de la zona militar, Francisco Luis Gordillo Martínez; segundo comandante, Edilberto Letona Linares; oficial S12 del Estado Mayor, Hugo Ramiro Zaldaña

Rojas; general de división, Manuel Antonio Callejas Callejas y el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Benedicto Lucas García. A todos se les imputó los delitos de desaparición forzada, delitos contra los deberes de la humanidad y violación con agravación de la pena.

Los militares retirados son señalados de ser los responsables de la desaparición del menor de 13 años y de los vejámenes que sufrió su hermana, Emma Guadalupe Molina Theissen en 1981.

“La resolución del juez es un mensaje muy poderoso porque nadie puede ponerse por encima de las leyes nacionales”, indicó la familia Molina Theissen al concluir la audiencia.

(Fuente: Nodal)

HAITI

ACERCA DEL GOBIERNO DE JOVENEL MOISE

El 7 de febrero, Jovenel Moise asumió el gobierno de Haití, representando al PHTK de (Partido de Haitianos de Calabazas Rapadas), un partido de derecha que estuvo en el poder desde 2010 hasta principios de 2016 con el ex presidente Michael Martelly que tenía en el gobierno buena parte del personal que trabajaba y apoyó la dictadura de los Duvalier.

La política del PHTK pasa, por sobre todo, por la apertura de Haití para el capital internacional, principalmente de Estados Unidos y las empresas canadienses

Jovenel fue elegido el 20 de noviembre del 2016, en la primera vuelta, con el 55% de los votos, algo más de 500.000 votos, de un total de más de 6 millones de personas aptas para votar.

El proceso electoral fue largo. Comenzó en agosto de 2015 y se caracterizó por el fraude, la violencia, la cancelación de las elecciones y, lo más importante, la falta de participación de la población, sólo el 21% de la gente habilitada para votar participó de los comicios de noviembre. Incluso con los principales candidatos de la oposición denunciando el fraude y sin reconocer la vitoria del candidato del PHTK.

A diferencia de lo que ocurrió a finales de 2015 y la primera mitad de 2016, cuando la población era de las calles de las grandes manifestaciones contra el fraude electoral y la injerencia externa en las elecciones convocada por los partidos de oposición, esta la oposición volvió a llamar a manifestaciones pero con poca participación de la gente. Tal vez porque la gente percibe que estos candidatos tienen una propuesta más personal o parecida al candidato victorioso, dando la espalda a las necesidades del pueblo haitiano. En su campaña Jovenel siempre dejó claro que continuará con las políticas que Martelly había comenzado: la creación de zonas industriales de libre comercio, la minería, la agroindustria y el turismo de lujo.

Durante el acto de posesión, el nuevo presidente agradeció el papel cumplido por la comunidad internacional en este proceso electoral, al ex presidente Martelly y, durante la mayor parte de su discurso, se refirió al desarrollo de la agricultura y el turismo.

En relación con el turismo, dijo que seguirá realizando concesiones de playas para las principales cadenas hoteleras, desarrollará seis áreas turísticas en el país: una en Monte San Nicolás (Noroeste) Haitien (norte) Montrouis (Artibonite) y Jacmel (sur), Jeremy (Grandanse) y Port Salut (Sur).

Otro punto señalado durante su discurso, y también es política del gobierno, es la modernización de la agricultura del país. Es en esta área donde ya opera el nuevo presidente que es un gran hombre de negocios que tiene alrededor de 700 hectáreas de tierra donde se producen bananas orgánicas que se exportan a Alemania.

Lema de la campaña fue “Jovenel Moise Neg bannann nan” (Jovevel Moise tipo banana), debido a su fama en el país como un empresario de éxito en el sector agrícola que produce banana.

Esto, en un país donde el 55% de la población vive en zonas rurales y la agricultura tiene una fuerte participación en el PIB, es un tema que llama mucho la atención de la población.

Para la agricultura su política se divide en tres frentes:

1) La primera es la legalización de la tierra de los campesinos. En la actualidad sólo el 1% de los agricultores tienen la documentación de la tierra. En el país se estima que hay alrededor de un millón de pequeña propiedad de entre 0,5 y 3 hectáreas de tierra por las familias sin la documentación y eso facilita a los agricultores a vender sus tierras y emigrar a la ciudad u otro país.

2) La segunda parte consiste en cambiar la Constitución en la parte que restringe la venta de tierras a extranjeros, y esto es un punto importante para su política, ya que la mayoría de las donaciones para su campaña provino de empresas en el sector agrícola de la República Dominicana y los Estados Unidos. Algunos todavía no están actuando en Haití.

3) La tercera parte sería la creación de Zonas Francas Agroindustriales con la financiación del gobierno de Haití (el presidente quiere crear un banco exclusivo para financiar estas zonas francas), BID, Banco Mundial y la Unión Europea. De acuerdo con el propio presidente tal órgano ya se ha comprometido a financiar estas áreas que serán libres de todo tipo de impuestos del país.

También se seguirán invirtiendo fuertemente en la minería. Ya hay 15 multinacionales de la minería en el país y 12 de ellas son canadienses. Y no es de extrañar que el día de pose, el presidente del gobierno canadiense anunció una donación de 91 millones de dólares para el presupuesto de Haití, y dejó claro que si el MINUSTH dejar el país está dispuesto a enviar tropas para continuar para “proteger al pueblo de Haití.”

En este mismo sentido, un día después de la asunción, la Unión Europea anunció la donación de 31 millones de euros para el presupuesto de Haití. Y exigió el compromiso del presidente del Congreso de Haití a rectifica el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) que está parado desde 2007 y permite la exportación sin tasas aduaneras entre Haití y la Unión Europea.

Con respecto al nuevo presidente del Congreso, no enfrentará resistencia. Tanto la Cámara de Diputados, como el Senado está formado por grandes hombres de negocios y comerciantes. Entre los senadores, de 30 solamente 4 son oposición, y la Cámara de Diputados el panorama no es diferente: de 119 miembros, 84 son a favor del gobierno.

Delante de esta situación ya comienzan las especulaciones sobre quién será designado como primer ministro. Todos los nombres que aparecen en la prensa haitiana son de hombres de negocios vinculados a alguna empresa estadounidense o canadiense y probablemente no va a tener obstáculos para pasar su nombre en congreso.

Después del terremoto de 2010, en Haití subió un gobierno neoliberal que comenzó a aplicar algunas políticas volcadas hacia el capital extranjero. Los próximos cinco años este nuevo gobierno estarán dirigidos a la consolidación de estas políticas: la minería, la agroindustria, el turismo de lujo y las zonas francas. Si los movimientos sociales progresistas y partidos de izquierda no tienen unidad en la lucha, el gobierno no va a encontrar mucha resistencia en la consolidación de las políticas neoliberales.

(Fuente: Informe de Brigada Dessalines de la Via Campesina en Haiti.
Resumen Latinoamericano)

PETITORIO/CARTA RETIRO TROPAS MINUSTAH DEL TERRITORIO HAITIANO

Llamamos a sumar fuerzas a favor de una Haití Libre y Soberana, uniendo la voz de su organización, su voz, al petitorio a presentarse a los gobiernos, parlamentos y la ONU, antes que voten nuevamente sobre la continuidad de las tropas de ocupación. Haga clic aquí y complete el formulario o envíe un correo a haiti.no.minustah@gmail.com con los datos. Organice una

actividad de entrega de la Carta a las autoridades respectivas en su país, durante la Semana de Solidaridad con Haití, del 15 al 22 marzo.

+++

A los gobiernos y parlamentos de América latina y el Caribe

A los órganos e instituciones de integración regional

A los gobiernos de los países integrantes del Consejo de Seguridad o contribuyentes de tropas

Al Secretario General de la ONU, Sr. António Guterres

¡Fuera la MINUSTAH ya!

Organizaciones populares, movimientos sociales y políticos de nuestra América y de otras latitudes reclamamos a nuestros países y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decisiones inmediatas para asegurar el retiro total de las tropas de ocupación de la MINUSTAH, el cierre de la Misión y la reparación de los daños y crímenes cometidos.

Haití no es una amenaza para la seguridad hemisférica y condenamos que así lo vienen asegurando desde hace 13 años para intentar justificar la ocupación militar ilegal de ese país. La presencia de la MINUSTAH, al contrario, sí ha significado una tremenda afrenta a la dignidad y la capacidad del pueblo haitiano, al ejercicio de su soberanía, al respeto de sus derechos humanos y su derecho de tomar decisiones sobre los bienes naturales y comunes que garantizan su sobrevivencia y buen vivir.

Ni qué decir de las mujeres, jóvenes, niñas y niños que han sufrido el abuso, violaciones y explotación sexual a mano de las tropas impunes que se dicen enviadas para cumplir una misión de apoyo y estabilización al país. O de las y los campesinos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras que han sufrido la represión de las tropas para obstaculizar sus conquistas. O sobre todo, de las más de 10.000 personas muertas y 800.000 infectadas a consecuencia del cólera, a causa de la negligencia, cuando menos, de esta Misión, agravada escandalosamente por la política de negación e impunidad mantenida por la propia ONU durante 6 largos años desde que las tropas introdujeron el cólera.

Es hora que los gobiernos de América latina y el Caribe en especial, y la comunidad internacional en general, reconozcan que la MINUSTAH no es la respuesta que precisa Haití. De hecho, el fracaso del proceso electoral que acaba de concluirse con la participación de menos de 21% del electorado, resultados cuestionados y la instalación de una gran cantidad de candidatos denunciados por su relación con diversas actividades criminales, evidencia la permanencia de una crisis de legitimidad del Estado y sus aparatos cuya resolución se suponía al centro del mandato de la Misión.

Reclamamos que retiren de inmediato las tropas –la mayoría proveniente de América latina– y pongan fin a la hipocresía de una Misión llamada de paz donde no hay ni hubo guerra, incumplidora de su mandato formal y violadora impune de los derechos de la población que se dice querer ayudar. Una misión, encima, gastadora de los recursos financieros con que el pueblo haitiano pudiera construir su propio presente y futuro. Unos pocos países ya han retirado sus tropas, y otros han anunciado su disposición para hacerlo a la brevedad, pero junto a nuestras organizaciones miembros y referentes en Haití, reclamamos que se vayan todas, y ahora.

¡NO EN NUESTRO NOMBRE! gritamos nuevamente. Pero tampoco es suficiente que la MINUSTAH se retire de Haití. La ONU, el Consejo de Seguridad, los países que contribuyen a su presupuesto y los que mandan sus tropas, tienen la obligación de reparar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos, incluyendo la implementación de un sistema para lograr el acceso universal al derecho humano al agua potable. La MINUSTAH tiene un presupuesto aprobado este año de USD 350 millones, y el plan lanzado con bombo y platillas, para erradicar el cólera e indemnizar a las víctimas y sus familias, intenta hasta ahora sin éxito, conseguir USD 400 millones durante este año y el próximo. Para nosotros, la matemática es muy

sencilla; el problema son los intereses de quienes ponen la plata o se contentan con aprovecharla por sus propios fines. ¡NO EN NUESTRO NOMBRE!

Reafirmamos nuestra voluntad a seguir defendiendo los derechos del pueblo haitiano, apoyándole solidariamente en su lucha cotidiana por superar el empobrecimiento y la explotación a lo cual ha sido sometido, el saqueo y la continuidad de más de 100 años de ocupación. Reclamamos de Uds., gobiernos y parlamentos, representantes oficiales del más alto nivel, que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades a respetar su soberanía y autodeterminación y a colaborar con el pueblo y gobierno de Haití, para asegurar todas sus necesidades y derechos.

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

HONDURAS

ASESINOS DE CÁCERES PERTENECÍAN A LA INTELIGENCIA DE HONDURAS

Las últimas evidencias sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. Los tres militares implicados en el caso habrían recibido entrenamiento contrainsurgente de parte de los EE.UU.

Los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo a lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico *The Guardian*.

Las evidencias contenidas en el expediente apuntan a la hipótesis de que la muerte de la activista indígena fue una ejecución extrajudicial. Así lo había denunciado ya el único testigo de la muerte de la indigenista, Gustavo Castro, quien señala al Estado hondureño como responsable.

Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que dejaría sin agua al pueblo indígena lenca. En la noche del 2 de marzo de 2016 varios sujetos ingresaron a su casa y le dispararon. La activista había recibido al menos 33 amenazas de muerte.

Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños, quienes habrían recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.

Mariano Díaz Chávez es un veterano de las fuerzas especiales hondureñas y desde 2015 se encontraba al frente de la inteligencia militar del país. Díaz y el teniente Douglas Giovanni Bustillo —también detenido por el asesinato y ex empleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico— habrían recibido entrenamiento antiterrorista en EE.UU. en 2005. Bustillo recibió entrenamiento en la infame Escuela de las Américas.

El tercer militar detenido, el sargento Henry Javier Hernández, es un francotirador y se convirtió en informante de la inteligencia militar cuando se retiró en 2013. Los tres visitaron el pueblo de La Esperanza, donde vivía Cáceres, en varias ocasiones, de acuerdo a los registros telefónicos.

Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto Agua Zarca también fue detenido. La empresa responsable del proyecto era Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), cuyo presidente, Roberto David Castillo Mejía, es miembro retirado de los servicios de inteligencia militar.

Desde el golpe de Estado contra el expresidente Miguel Zelaya en 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.

Fuente: <http://www.telesurtv.net/>

MÉXICO

AVALA PRD-PUEBLA PROPUESTA DE BARBOSA PARA QUE AMLO SEA EL CANDIDATO DE LAS IZQUIERDAS

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado respaldó la propuesta del senador Miguel Barbosa para que el partido busque una alianza con fuerzas de izquierda y abanderen a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia en 2018.

En rueda de prensa, la presidenta estatal de ese instituto político, Socorro Quezada Tiempo, y el líder del Frente de Izquierdas Progresistas, Eric Cotoñeto Carmona, señalaron que antes que reclamar la renuncia de Barbosa, la dirigencia nacional debe definir su postura ante el proceso electoral que se avecina.

El PRD debe decidir si buscará una alianza con las fuerzas de izquierda, que es lo que consideran conducente muchos militantes de ese partido, subrayó Quezada, y dijo que la propuesta de Barbosa es congruente con el actual escenario nacional, que deja ver la posibilidad de que un candidato de izquierda como López Obrador tiene amplias posibilidades de ganar la elección presidencial, y aún más si existe una coalición de fuerzas políticas.

La líder perredista lamentó que la dirigencia nacional de su partido, encabezada por Alejandra Barrales, pidiera la renuncia del senador poblano, y en cambio no reaccione igual cuando otros militantes proponen una alianza con la derecha.

“Es urgente que el PRD defina la ruta que seguirá para las elecciones de 2018”, insistió Quezada, quien recordó que su partido ha estado en el fondo de las encuestas por haber perdido su identidad como fuerza política de izquierda.

De hecho, reconoció que si el sol azteca no se suma a la candidatura del tabasqueño, es prácticamente un hecho que habrá una desbandada de militantes que se sumarán al proyecto de Morena.

Y aunque aseguró que ella se mantendrá en las filas del PRD, advirtió que en Puebla su partido buscará una alianza o una candidatura común con Morena para postular un candidato a gobernador en 2018.

Recordó que en los comicios locales de 2016, cuando postuló a un candidato propio, el PRD recuperó parte de la identidad que había perdido cuando fue en coalición con el PAN para postular al panista Rafael Moreno Valle en 2010.

“La coalición va a depender de Andrés Manuel López Obrador, y le hago un llamado a la reflexión, porque dejar en la orfandad a los estados va a generar una pugna con los caciques si gana la Presidencia”, manifestó.

Fuente: <http://www.proceso.com.mx/>

NICARAGUA

¡NO A LA APROBACIÓN DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN NICARAGUA!

La Alianza “Semillas de Identidad”, conformada por seis redes nacionales y más de 35 mil familias productoras de granos básicos, presentó una solicitud al gobierno de Nicaragua para que no ceda ante las presiones de las empresas agroindustriales, que pretenden introducir semillas transgénicas para el establecimiento de cultivos o fines experimentales, de investigación y comercio.

Según el Censo Agropecuario del 2012, en Nicaragua existen casi 240 mil productores, el 90 por ciento de los cuales son pequeños y medianos, poseen el 67 por ciento de las tierras cultivables y producen el 91 por ciento de la producción de maíz y el 82 por ciento del frijol.

Desde que en el 2006 se lanzó la Campaña “Semillas de Identidad”, las organizaciones, redes y grupos que la integran lograron identificar 141 variedades criollas de frijol, 127 de maíz, 38 de sorgo y 9 de arroz.

También se han creado más de 400 bancos comunitarios de semillas criollas de propiedad colectiva, que permiten a miles de familias campesinas tener acceso a este impresionante patrimonio genético.

Ante las fuertes presiones ejercidas por las empresas agroindustriales para que el gobierno apruebe la introducción de semillas transgénicas, la Alianza “Semillas de Identidad” alertó sobre el peligro de contaminación genética que afectaría gravemente las variedades criollas y acriolladas.

“Hoy más que nunca estamos comprometidos con la defensa de nuestras semillas criollas y acriolladas”, dijo Carlos Vidal Tenorio, del Programa Campesino a Campesino (PCaC).

Según él, diferentes estudios ya han demostrado que los cultivos transgénicos no sólo no son más productivos que los cultivos tradicionales, sino que son adictos a los agrotóxicos, generan problemas de salud, contaminación y erosión genética.

Además, como las semillas transgénicas están patentadas por las grandes trasnacionales, los productores no podrán ni guardarlas, ni sembrarlas nuevamente sin pagar una licencia.

“Todo esto nos traería más dependencia, pérdida del patrimonio nacional y contaminación ambiental. Vamos a crear un frente de lucha contra la introducción de transgénicos al país”, indicó Vidal Tenorio.

También para Mayra Flores de la Red GPAE y Blanca Landero del MAONIC es importante pronunciarse para que el patrimonio genético de Nicaragua se cuide y se defienda.

“Debemos seguir impulsando la agroecología, defendiendo nuestras semillas autóctonas, sumando a más familias productoras, oponiéndonos a la introducción de cualquier tipo de transgénicos. Y queremos que nuestro gobierno nos escuche y nos apoye”, dijeron las dos productoras.

Ante este peligro inminente y basada en los principios de “prevención” y “precaución”, la Alianza “Semillas de Identidad” solicitó al actual gobierno no permitir la introducción de cultivos transgénicos, al tiempo que instó a estar alerta ante “la falsa propaganda y promesas engañosas de las grandes multinacionales”.

También pidió que ante las solicitudes de empresas privadas de introducir cultivos transgénicos, las autoridades se apeguen a los procedimientos establecidos por la Ley 705 o Ley de Bioseguridad.

Desafortunadamente, esta ley, la más avanzada de la región centroamericana en el control y regulación de OGM, nunca ha sido reglamentada. Esto limita enormemente su aplicación.

Finalmente, la Alianza solicitó “fortalecer las capacidades administrativa y técnicas de las autoridades competentes para revisar, analizar y determinar los riesgos asociados a especies transgénicas”, así como “defender los derechos de la agricultura familiar y la preservación del patrimonio genético nacional”.

Fuente: <http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.es/>

PANAMÁ

LAS MANIOBRAS OLIGARCAS DENTRO DE LA OLIGARQUÍA

La crisis gubernamental panameña es difícil de resolver en la medida en que el sistema político está diseñado para que funcione una especie de 'alternabilidad'. Fue creado por EEUU después de su invasión militar a Panamá en 1989. Se supone que las fracciones de la oligarquía son estancos cerrados y que deben reemplazarse cuando la oferta del gobernante se agota. El problema de Varela es que se agotó muy temprano: Apenas por la mitad del camino (2 años y medio de un total de 5).

Lo políticamente correcto en un sistema montado por la oligarquía, en un caso como éste, es que el gobierno busque reforzamiento entre los partidos políticos de la oposición. La fracción oligarca gobernante tendría que compartir los beneficios de su gestión con la fracción que se pasa de la oposición a las filas oficialistas. Todo indica que esta solución no es viable en estas circunstancias. Es todo o nada.

Desde hace 27 años la oligarquía panameña ha gobernado alternando el poder y excluyendo a los sectores populares. Los primeros diez años (1990-1999) fueron de ajuste económico (bajo el binomio Pérez Balladares-Chapman). Después siguieron 8 años (2000-2008) de crecimiento económico (sin desarrollo) como resultado del traspaso de la administración del Canal de Panamá y el incremento progresivo de los peajes del Canal. Los últimos 8 años (2009-2016) fueron marcados por los años de más crecimiento (ampliación del Canal) y el declive al final. El ajuste económico premió a la oligarquía – en su conjunto - y castigó severamente a los trabajadores. Estos últimos perdieron muchos empleos, vieron deprimirse sus salarios y desaparecer sus beneficios sociales.

Cada quinquenio presidencial es recordado por los enfrentamientos sangrientos entre trabajadores, empleados públicos, estudiantes, indígenas y las fuerzas del orden. La desregulación y la flexibilización, así como los tratados comerciales, han arruinado el agro y la industria. Los gobiernos oligarcas desde 1990 han pregonado la falsedad de que Panamá es un país de servicios y no debe invertir en el desarrollo económico del país. Con el discurso de la posición geográfica y 'pro mundo beneficio', la oligarquía cooptó a las capas medias del país y desorganizó a sectores importantes de los trabajadores.

En el período mencionado, la oligarquía panameña ha contado siempre con la permanente intervención de EEUU en los asuntos de gobernabilidad, así como en la política económica (neoliberal) del país. En 2009 intervino para resolver un pleito entre dos fracciones oligárquicas. En esta coyuntura la estructura gubernamental está tan debilitada que una intervención es muy tarde. ¿Qué puede hacer el neurocirujano-jefe (la Embajada de EEUU)? Las Fuerzas del Orden, también corruptas – parte de la estructura gubernamental - cuentan con dos destacamentos (Policía Nacional y Servicio Nacional de Fronteras) que pueden dar una sorpresa siguiendo órdenes del neurocirujano-jefe.

En la crisis actual hay sectores de las capas medias (denominadas sociedad civil), con niveles de consumo más altos que los trabajadores, que demandan un alto a la corrupción y un cambio de la 'vieja guardia' política. Ideológicamente, están atrapados porque no pueden luchar por un retorno al pasado (militar) ni a los discursos liberales y conservadores (agotados por la corrupción). Tampoco pueden levantar un discurso hacia el futuro que ideológicamente no pueden formular. Las capas medias son prisioneras de las promesas de la oligarquía. Agotadas éstas, la sociedad civil sucumbe ante sus propias limitaciones.

La promesa de los trabajadores también ha sido golpeada fuertemente. Hay sectores que añoran el retorno al 'torrijismo' u otras formas de populismo. Como todo sueño basado en el pasado es inútil, las propuestas se agotan rápidamente. Los trabajadores y sectores populares que levantan banderas 'progresistas' también se ven en una jaula con paredes muy angostas.

Debido a la incesante propaganda – por más de un cuarto de siglo – contra cualquier proyecto que implique la construcción de un futuro que garantice bienestar social para los trabajadores, no se han podido levantar consignas que entusiasmen a la juventud.

A pesar de ello, Panamá cuenta con FRENADESOFAD y el MIREN que son dos organizaciones político sindicales con fuerte presencia, también en sectores de las capas medias. La oligarquía panameña está conciente de esta realidad y prefiere entenderse internamente antes de cederle espacio a los sectores populares. La crisis de la oligarquía no puede resolverse con parches. Tiene que cambiar totalmente las reglas que se impuso en el período 1990-2015 o colapsa. Las alternativas no son muy claras en este momento.

Fuente: Marco A. Gandásegui, hijo en <http://www.alainet.org/>

PUERTO RICO

CONVOCAN MANIFESTACION CONTRA EL PLAN FISCAL Y LA REFORMA LABORAL

Se Acabaron Las Promesas (Jornada) convoca al pueblo indignado a una concentración para darle candela al plan fiscal que se espera que el gobernador Ricardo Rosselló presente ese mismo día ante la Junta de Control Fiscal y demostrar que nuestro pueblo no tolerará más atropellos en silencio.

No es casualidad que esta fecha coincida con el mensaje de estado de situación del primer ejecutivo pues no dudamos que el injusto plan requerido por la Junta se hará realidad a través de las gestiones de Rosselló, quien ya demostró su intención de servir como su marioneta. Por tanto, sabemos que el mensaje será otra farsa para crear la ilusión de una democracia con transparencia y continuar haciendo promesas que nunca van a cumplir.

Sin duda, el propósito del plan que presentará Rosselló será garantizar el pago de una deuda que sospechosamente se niega a auditar a través de medidas como el cierre de escuelas y recintos de la UPR, aumentos en los costos de la educación superior y de servicios esenciales, reducción de personal y empeoramiento del acceso a servicios de salud dignos, así como la eliminación de derechos de la clase trabajadora por petición de ciertos sectores empresariales, reducción de pensiones y salarios, y mayor criminalización de la protesta.

Por eso llamamos al pueblo a demostrar su repudio a este plan en la calle, que es el único espacio donde cabemos todos y todas, y que ha demostrado ser efectivo para detener los abusos contra nuestra gente. Allí debemos reclamar el fin de esta política de austeridad que tanto ha deteriorado nuestras condiciones de vida, cayendo con mayor peso sobre los sectores más desventajados, como las comunidades más pobres e inmigrantes, las mujeres, nuestra niñez, y nuestros viejos y viejas. Como parte de ello, también se debe derogar la reforma laboral así como detener la draconiana reforma del código penal que busca castigar la resistencia a los abusos.

Del mismo modo, debemos exigir que se audite la llamada deuda pública y que se procese criminalmente a quienes se han lucrado de la crisis que ellos mismos crearon a través de la venta ilegal de bonos y de favores políticos, incluyendo a banqueros, empresarios y funcionarios del gobierno. Debemos dejar claro que al manifestarnos contra el gobernador no dejamos de señalar la complicidad de sectores empresariales del País que, en contubernio con políticos electos, cabildearon a favor de la imposición de la Junta para adelantar medidas que les permitan continuar lucrándose de la explotación de nuestro pueblo. Por tanto, le decimos a la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, ciertos colegios profesionales y otras organizaciones con objetivos similares que no nos hemos olvidado de ustedes y que continuaremos señalándolos allí donde estén poniendo sus ganancias por encima de nuestras vidas.

Tampoco olvidamos la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos que agudizó la condición colonial y antidemocrática de Puerto Rico al imponer una Junta de empresarios y corruptos no electos que determinará el curso de nuestras vidas para beneficio de unos pocos con total

impunidad. Ante ello, reiteramos nuestro reclamo de que se derogue la ley PROMESA y comience un tardío pero justo proceso de descolonización para nuestro archipiélago.

Les exhortamos a todos y todas a que se unan a esta concentración con vestimenta negra en señal de resistencia. También pueden encontrar y compartir más información en nuestra página de Facebook llamada Jornada: Se Acabaron Las Promesas o a través de nuestro correo electrónico seacabaronlaspromesas@gmail.com.

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

VENEZUELA

LA URGENTE NECESIDAD DE EE.UU DE ACABAR CON PETROCARIBE

Los planes de las corporaciones petroleras de Estados Unidos con relación al Caribe pasan por su principal plataforma energética y geopolítica: Petrocaribe. Y por su sostén, creador e impulsor: Venezuela.

En el desarrollo del hostigamiento geopolítico contra Venezuela, el Caribe adquiere una desembocadura específica. Tanto por el peso que ejerce en momentos donde la real politik se impone en la región (en cuanto a decisiones trascendentes con respecto a Venezuela), como por su ubicación y perfil dentro del continente: constituye un pasadizo marítimo hacia el atlántico que conecta comercialmente a Sudamérica con Estados Unidos y Europa, región clave para el posicionamiento militar de las potencias, un mercado estratégico para construir poderosas áreas de influencia en lo energético, económico y financiero, etc.

Es en ese marco indivisible de factores que las corporaciones petroleras de Estados Unidos y sus operadores políticos buscan generar un clima de inseguridad y zozobra en los países de la región con respecto a Petrocaribe. Esto con el objetivo de desestimular las bases de apoyo al acuerdo de cooperación y tratando de conducir a sus países miembros (sobre la base del temor) a que firmen contratos desventajosos y financieramente dañinos que tendrían a las corporaciones de Estados Unidos como los principales beneficiarios.

El gas natural de EEUU, una apuesta geopolítica

Según un informe publicado por The American Dialogue en 2015, Estados Unidos viene incrementando su producción de gas natural desde el año 2007, mediante técnicas de extracción no convencional (fracking).

El aumento de la producción los ha colocado como uno de los principales productores globales del planeta, a tal punto de que el gas natural que importaban desde Trinidad y Tobago, Canadá y algunos países de Medio Oriente ha sido sustituido por la producción interna. Ahora esos terminales de importación, ubicados mayoritariamente en la costa suroeste, proyecta convertirse en terminales de exportación para el excedente producido.

En tal sentido, el Caribe es el mercado natural para que esas exportaciones tengan uno o varios compradores.

En 2014 específicamente el Departamento de Energía de EEUU levantó las restricciones para la exportación de gas natural por las empresas de ese país. Según una publicación de la revista Forbes en 2016, la segunda y cuarta empresa que más producen gas natural en el mundo son Exxon Mobil (277,50 millones de metros cúbicos de gas natural por día) y Chevron (141,58 millones de metros cúbicos de gas natural producidos al día).

Este plan de convertirse en una potencia gasífera que compita con exportadores consolidados como Rusia o Irán, también tiene sus complicaciones: la caída de los precios del petróleo y el cierre de amplios proyectos de inversión a lo interno de EEUU hace inestable que pueda

mantener el aumento de su producción y por ende una fuente segura de suministro al mercado global.

Petrocaribe, pese a las complicaciones actuales, sigue mostrando resultados positivos

Aún con estas debilidades y contradicciones, Estados Unidos busca en el gas una gran apuesta geopolítica para disputar mercados globales y zonas de influencia estratégicas, entre las cuales se encuentra el Caribe, tanto por su proximidad como por su peso dentro de la ecuación del poder continental.

El informe comentado con anterioridad afirma que 2017 es un año clave para la conquista de estos objetivos.

Jugadas políticas, cumbre paralela y lo que no dicen las declaraciones

Este marco de urgencias es el que ha definido los movimientos de los operadores políticos de EEUU con respecto a Petrocaribe en los últimos años.

Las declaraciones de John Kelly (ex jefe del Comando Sur y actual secretario de seguridad nacional de la Administración Trump) y John Kerry (ex secretario de Estado) en marzo de 2015, sobre el inminente colapso de Petrocaribe que traería una “crisis humanitaria” para la región, tenían como objetivo influir negativamente en los gobiernos para que firmaran acuerdos de suministro de gas natural con EEUU y proyectos de endeudamiento, en menoscabo de Petrocaribe.

En ese marco también se dieron las dos Cumbres de Seguridad Energética en el Caribe, en 2015 y 2016 en Washington, dirigidas por el ex vicepresidente de EEUU, Joe Biden. En ese espacio no sólo se buscaba construir una instancia paralela a Petrocaribe que buscara eclipsar su influencia, sino regularizar una plataforma de financiamiento para presionar a los países del Caribe en cuanto a cómo perfilar su situación energética, precarizada durante décadas por la explotación, precisamente, de las corporaciones que hoy dicen querer ayudar al Caribe.

Porque si una región sabe de intervenciones militares, explotación económica, explotación sistemática de sus habitantes y de sufrimiento es precisamente el Caribe. El gas natural como apuesta geopolítica para retomar el control de esa región no es más que otra excusa para dominarla, endeudarla y hundirla en la miseria. Buscando desmontar las columnas de protección política y diplomática del chavismo, justamente en un momento donde el pulso político se maneja enteramente en la arena internacional. Buscan matar dos pájaros de un tiro.

Pero contrario a la inestabilidad y alto endeudamiento que significa la alternativa estadounidense del gas natural para la región, Petrocaribe, aún con todas las complicaciones que ha tenido Pdvsa producto de la salvaje caída de los precios del petróleo, sigue mostrando resultados positivos.

Cubre el 32% de petróleo del Caribe, ha incidido positivamente en el 25% del PIB de cada uno de sus países, las refinerías y empresas mixtas dirigidas por PDV Caribe, facilitan el acceso a los hidrocarburos y las modalidades solidarias de pago, evitan que el endeudamiento se transforme en un yugo que limite sus posibilidades de crecimiento económico.

2017 será sin lugar a dudas un año de recrudescimiento en la disputa por el Caribe. Y Venezuela seguirá apostando a los puntos en común que guarda con la región como activo político y energético: dos partes del continente esquilmas por más de 200 años por Estados Unidos.

Fuente: Resumen Latinoamericano/Misión Verdad, Marzo 1 de 2017